Valledupar, Cesar, nueve (09) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

PROCESO: DIVORCIO DE MATRIMONIO CIVIL
DEMANDANTE: ROSA LEONOR RIOS CASTRO
DEMANDADA: JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO
RADICACIÓN: 20-001-31-10-001-2022-00104-00

I. ASUNTO.

Procede el despacho a dictar sentencia escrita dentro de la oportunidad prevista en el inciso 3° del numeral 5° del artículo 373 del Código General del Proceso.

II. SÍNTESIS DE LA DEMANDA.

II.1. Hechos relevantes.

PRIMERO: Para el 31 de diciembre de 2003, en la Notaría Segunda de Valledupar, Mediante Registro Civil de Matrimonio No. 05177904 contrajeron matrimonio civil, la señora **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** identificada con la Cedula de Ciudadana No. 40.046.140 expedida en Tunja Boyacá y el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO** identificado con la Cedula de Ciudadanía No. 74.346.508 expedida en Miraflores (Boyacá).

SEGUNDO: De este matrimonio nacieron los siguientes hijos:

➤ El joven **JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RIOS**, de 14 años de edad, nacido el día 30 de octubre de 2008 en Valledupar (Cesar).

➤ El joven **JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**, de 23 años de edad, nacido el día 02 de septiembre de 1999 en Miraflores (Boyacá).

TERCERO: Durante su vida matrimonial los cónyuges **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** y el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**, adquirieron bienes inmuebles, como son una casa lote No.08 de habitación ubicada la Calle 14D N° 43-59 del barrio Don Alberto de Valledupar, con matrícula inmobiliaria No. 190-91194 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y cuyos linderos están determinado en la escritura pública Numero 867 de fecha 14-07-99 de la Notaria tercera de Valledupar lote 08 MZA del barrio Don Carmelo de Valledupar.

CUARTO: La última vez que los cónyuges compartieron, la comunicación fue un poco difícil, y él señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**, se mostró agresivo en su leguaje verbal y físico.

QUINTO: De conformidad con lo anteriores hechos los cónyuges **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** y el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**,

estar incursos dentro de la causal de divorcio establecida en el numeral 8 del artículo 154 del Código Civil Colombiano.

II.2. Pretensiones.

“1. Decretar el Divorcio del matrimonio civil, celebrado entre mi poderdante la señora **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** y el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**, celebrado el 31 de diciembre de 2003 en la ciudad de Valledupar, ante el señor Notario Segundo de Valledupar con fundamento en la causal de que trata el numeral 8º de los artículos 154 y 156 del Código Civil.

2. En consecuencia Declarar disuelta y en estado de liquidación la Sociedad Conyugal conformada dentro del matrimonio civil entre **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** y **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**, teniendo en cuenta las siguientes:

A) Declarar que como los hijos habidos en el matrimonio uno menor de edad y otro mayor de edad de vidas dependientes de sus padres al estar aun cursando estudios académicos, requieren del cuidado de sus padres, el menor de edad de nombre **JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RIOS**, nacido el día 30 de octubre de 2008 en Valledupar- Cesar, y el mayor de edad de nombre **JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**, nacido el día 02 de septiembre de 1999, en Miraflores (Boyacá)., cuyos registros civiles aporto.

B) Cada uno de los cónyuges de manera independiente de acuerdo a su posición económica, laboral, familiar y social, han venido asumido la custodia, cuidados, manutención, bienestar, salud, recreación, educación y deporte, de sus hijos de la siguiente forma:

➤ El joven **JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RIOS**, estará a cargo de su señor padre el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO**.

➤ El joven **JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**, estará a cargo de su señora madre la señora **ROSA LEONOR RIOS CASTRO**.

3. Se ordene la inscripción de la sentencia que decreta el divorcio en los libros de registro civil del estado de las personas en la correspondiente notaria.

4. Que se decrete la liquidación y disolución de la sociedad conyugal existente, del 50%, correspondiente al bien inmueble casa lote No.08 de habitación ubicada la Calle 14D N° 43-59 del barrio Don Alberto de Valledupar, matrícula inmobiliaria No. 190-91194 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar y cuyos linderos están determinado en la escritura pública Número 867 del lote 08 MZA del barrio Don Alberto de la ciudad de Valledupar, de fecha 14-07-99 de la Notaria tercera de Valledupar.”

II.3. Pruebas aportadas.

1. Registro civil de matrimonio entre **ROSA LEONOR RIOS CASTRO y JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO.**
2. fotocopia de la Cedula de Ciudadanía de la señora **ROSA LEONOR RIOS CASTRO.**
3. Registro civil de Nacimiento de los hijos habidos en el matrimonio (**JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ RIOS y JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**).
4. Certificado de libertad del bien inmueble con matrícula inmobiliaria No. 190-91194 de la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Valledupar.
5. Copias de la escritura del bien inmueble.
6. Partida de matrimonio celebrado entre **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO Y JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO.**

III. TRAMITE PROCESAL.

La demanda fue inadmitida mediante auto del primero (1°) de abril de dos mil veintidós (2022), por reunir los requisitos legales, ordenándose notificar a la parte demandada.

El 25 de abril de 2022, la señora **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO** a través de su apoderado judicial solicito se decretaran Medidas Cautelares con carácter previo en el proceso, medidas que fueron decretadas en el auto que fijo fecha de audiencia del trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

Pese a haberse notificado al demandado del auto admisorio de la demanda por vía de correo electrónico el 18 de abril de 2022, el demandado no contesto la demanda.

El 17 de agosto de 2022 el Dr. **John Marlon Martínez Rojas**, quien es el apoderado de la parte demandante renunció al poder otorgado por la señora **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO**, debido a que este se vincularía como empleado público y adjunto las evidencias que avalan tal situación. Acto seguido a la renuncia del abogado, la demandante concedió poder al Dr. **Álvaro José Fuentes Lineros**, documentación que fue remitida el 02 de septiembre de 2022.

Mediante auto del trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022) se decretó pruebas y fijó fecha de audiencia.

El veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023) se llevó a cabo la primera audiencia de manera virtual, durante esta audiencia se celebraron todas las etapas previstas en el artículo 372 del C.G.P., se valoraron y realizaron las pruebas aportadas, decretadas y ordenadas, en aras de obtener mejores elementos de juicio; se suspendió la audiencia con el fin de realizar la valoración probatoria, a efectos de dictar sentencia escrita favorable a las pretensiones de la demanda dentro del término de diez (10) días siguientes a la diligencia. Inciso

3° del numeral 5° del artículo 373 del Código General del Proceso, ordenándose notificar al Consejo Superior de la Judicatura esta decisión.

IV. CONSIDERACIONES.

PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO.

Corresponde al despacho determinar si en realidad los esposos **ROSA LEONOR RIOS CASTRO** y el señor **JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO** se encuentran separados de hecho desde hace más de dos años.

La demandante invoca como causal de divorcio la contemplada en el numeral 8° del artículo 154 del C.C, el cual consagra que podrá demandarse el divorcio cuando existe entre la pareja una separación de hecho por el término de dos años.

Con la expresión “o de hecho se consagró una causal objetiva en la cual los criterios de inocencia o culpabilidad no son aplicables; lo que significa que puede ser demandada por cualquiera de cónyuges como una excepción al artículo 156 del C.C. el cual prevé: “El divorcio solo podrá ser demandado por el cónyuge que no haya dado lugar a los hechos que lo motivan...”

La separación de hecho entendida como una interrupción de la comunidad de vida, sin que medie un procedimiento ante autoridad competente; contribuye a la solución jurídica de quienes por desinterés o no estar asistidos del deseo de ventilar las verdaderas razones que condujeron a la separación, se abstuvieron de tramitar dentro de la oportunidad legal su separación jurídica.

Desde el momento mismo en que se separa la pareja inmediatamente se dejan de cumplir los fines propios del matrimonio, pues cesa la ayuda mutua, el socorro, la cohabitación, la fidelidad, el respeto, etc; que son la esencia del mismo; en tales circunstancias solo queda vigente un vínculo innecesario de matrimonio inexistente que amerita ser disuelto legalmente.

Al respecto la Corte Constitucional ha señalado que “...si los cónyuges no desean continuar con el vínculo matrimonial, cuentan con posibilidades jurídicas para disolverlo como el mutuo acuerdo, o la posibilidad que ambos cónyuges tienen de acudir a la separación de cuerpos para luego de transcurridos dos años, proceder a solicitar el divorcio, restricción que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que la finalidad es proteger a la familia y tratar de recomponer el vínculo matrimonial”. (Sentencia C-394 de 2017 la Corte Constitucional).

Es decir, que no puede obligarse a los cónyuges a mantener un vínculo contrario a su voluntad, intereses, integridad y dignidad; razón por la cual, se otorgaron amplias facultades al legislador a fin de establecer las formas de extinguir el matrimonio en situaciones imposibles de superar; caso en el cual, resulta necesario garantizar que los cónyuges puedan reestablecer sus vidas familiares y afectivas.

Siendo así, el divorcio ha sido instituido como una forma de brindar solución a los conflictos irreconciliables entre los contrayentes, ya sea de forma particular o a través de la intervención del órgano judicial.

Es por ello que el artículo 152 del C.C., establece que el matrimonio civil se disuelve por la muerte real o presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado.

En lo que tiene que ver con esta causal la exigencia del término de dos años a efectos de que la separación de cuerpos pueda ser invocada como causal de divorcio obedece a la obligación constitucional de protección a la familia, a través de una relación matrimonial relativamente estable; y así mismo, garantiza que cualquiera de los cónyuges pueda obtener el divorcio de su matrimonio, a través de esta causal, una vez culminen los dos años de separación; abriendo así, la posibilidad de establecer nuevas relaciones sentimentales y organizar una vida de pareja.

De manera que, la facultad de que a instancia de uno o de ambos cónyuges proceda el divorcio con fundamento en la causal octava, se difiere en el tiempo, brindando a ambas partes la posibilidad de concretar su decisión, teniendo en cuenta las consecuencias que esta genera.

La exigencia legal de dos años está encaminada a la defensa del matrimonio de las crisis que frecuentemente lo rodean, constituyéndose la separación de cuerpos, en primer lugar, en una oportunidad de reflexión de la decisión definitiva de disolver el vínculo y, en segundo lugar, prepara a la pareja para hacer frente a las consecuencias de esa ruptura matrimonial.

A su vez, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en Sentencia SC4027 de 2021 dejó sentado que: *“...Es incuestionable, el rompimiento de la vida matrimonial en forma duradera, incluyendo la marital, implica material e indiscutiblemente la cesación del trabajo, la ayuda y el socorro mutuos, necesario para facilitar no solo la armonía entre los cónyuges o los compañeros permanentes, sino también para aliviar las cargas que esas convivencias conllevan en lo personal y social.*

La separación de hecho implica una aceptación libre que no puede guarnecer soluciones injustas o enriquecimientos incausados, defendiendo la existencia de una apariencia formal de matrimonio sin que haya ejecución material recíproca de los deberes y obligaciones esenciales, comportamiento que del todo excluye la convivencia”.

CASO CONCRETO

En el caso bajo análisis la señora **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO** pretende el divorcio de su matrimonio civil celebrado con el demandado, señor **JUAN RODRIGO RODRÍGUEZ ALFONSO** el día 31 de diciembre de 2003, en la Notaría segunda de esta ciudad y apoya sus pretensiones en la causal de divorcio consagrada en el numeral 8° del artículo 154 del C.C., es decir: *“La separación de cuerpos judicial o, de hecho, que haya perdurado por más de dos años”.*

Como consecuencia de lo anterior, solicita se declare disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal conformada por el hecho del matrimonio.

Como hechos de la demanda en síntesis manifiesta la fecha y el lugar donde se celebró el matrimonio,

La existencia de los hijos habido entre la pareja, la adquisición de un bien inmueble dentro de la sociedad conyugal, la última vez que “La última vez que los cónyuges compartieron, la comunicación fue un poco difícil, y él señor JUAN RODRIGO RODRIGUEZ ALFONSO, se mostró agresivo en su lenguaje verbal y físico”.

Se pasa entonces a revisar el caudal probatorio recaudado en este asunto a fin de establecer si la pareja en realidad se encuentra separados de hecho por un término superior a dos años; término establecido por la norma como mínimo para que se configure la causal de divorcio.

Con la prueba documental quedaron demostrados los siguientes hechos:

- i.- El matrimonio civil celebrado entre las partes el día 31 de diciembre el 2003
- ii.- La existencia de los hijos **JUAN SEBASTIAN y JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**, habidos en la relación matrimonial.
- lii.- su condición de ciudadanos colombianos.
- iv.- la existencia del bien inmueble presuntamente adquirido dentro de la sociedad conyugal.
- vi. Que la pareja se encuentra casada por la iglesia católica.

En el interrogatorio de parte la demandante señora **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO**, manifestó lo siguiente:

Que su esposo no ha estado de acuerdo con el divorcio, que en 2017 conciliaron lo concerniente a la custodia, visita y alimentos de sus hijos; que se separaron hace cinco años, es decir desde el 2017 por una crisis matrimonial y porque no había sentimientos de afecto de ella a hacia él; que le pidió el divorcio él no quiso; al separarse ella se fue de la casa con sus dos hijos a vivir a la casa de la mamá y el demandado se fue a vivir a Boyacá concretamente en la ciudad de Miraflores con su hijo menor JUAN SEBASTIÁN. Que su esposo ha venido varias veces a esta ciudad; en una oportunidad a firmar la escritura de casa, y en otra oportunidad a recoger a su hijo, no ha habido reconciliación desde que separaron en el 2017

Por su parte el demandado señor **JUAN RODRIGO RODRÍGUEZ ALFONSO** al rendir bajo la gravedad del juramento corrobora casi en su totalidad lo manifestado por la demandante; confiesa que se encuentra separado de ella desde hace más de dos años, que esa separación se dio en el 2017; que desde esa fecha hasta el 2022 se fue a vivir a Miraflores con su hijo menor, que es cierto que vino a Valledupar a firmar la escritura de la casa, una vez a recoger a su hijo y como tenía negocio por el municipio de Tenerife pasó a esta ciudad a ver a su hijo. Que no ha habido reconciliación entre ello a pesar de que al principio de la separación él trató de reconstruir su hogar, pero no fue posible, por lo que considera que la separación es irreversible.

Se entra a determinar si con la confección hecha por el demandado al momento de rendir el interrogatorio, es prueba suficiente para demostrar la causal de divorcio alegada en la demanda.

Dice la Corte Constitucional en sentencia C-559-2019: “El interrogatorio o declaración de parte tiene por objeto obtener de los demandantes o demandados la versión sobre los hechos relacionados con el proceso y puede llegar a configurar una confesión, siempre y cuando recaiga sobre hechos que perjudiquen al declarante o favorezcan a la parte contraria y se cumplan los demás requisitos señalados por el artículo 191 del C.G.P.”

Como cualquier otro medio de prueba, el interrogatorio suministra certeza al juez sobre la verdad de los hechos que sirven de fundamento a las pretensiones de la demanda o de las excepciones. Es decir, busca formar el convencimiento judicial respecto de la realización de determinados hechos que interesan al proceso, pues constituyen el sustento de las peticiones presentadas por las partes del mismo”.

Resulta entonces, el interrogatorio de parte de gran importancia dentro de todos los medios de prueba establecido por nuestro ordenamiento procesal civil, pues es la parte quien frente al operador judicial da la versión de cómo sucedieron los hechos debatidos de los que tiene conocimiento directo pues fue protagonista de ellos, lo que le permite narrar con precisión las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que sucedieron.

El Código General del proceso, destina los artículos 191 a 205 para regular lo atinente a la confesión como un medio de prueba que surge del denominado interrogatorio de parte.

Dice la doctrina al referirse a esa específica prueba que:

“Aceptar hechos lesivos de los propios intereses constituye un medio probatorio de particular efecto en el ánimo del juez que analiza la manifestación, de ahí que, en Colombia, país como pocos inclinados a toda suerte de reinados, no haya escapado a la epidemia del derecho probatorio y es así como se denomina la confesión como la “reina de las pruebas” por estimarse que es el mejor de los medios de llevar certeza al juez.”

“La confesión, medio de prueba y acto de voluntad, consiste en la manifestación que hace una parte sobre hechos que pueden producir consecuencias jurídicas adversas o que favorezcan a la parte contraria; confesar pues, es reconocer como verdadero un hecho o un acto de índole suficiente para producir contra el que lo admite consecuencias jurídicas, certeza que puede predicarse tanto de los hechos trasuntados como fundamento de la demanda o como basamento de las excepciones propuestas” (Hernán López Blanco, procedimiento Civil-Pruebas)

Calcando la idea anterior al caso específico que es objeto de análisis se colige sin lugar a equívocos que el demandado al rendir el interrogatorio de parte produjo una confesión sobre los hechos de la demanda que favorece sus pretensiones, al aceptar que se encuentra separado de su esposa desde el año

2017, que desde esa época viven en ciudades diferentes y que no ha habido reconciliación entre ellos.

La confesión hecha por demandado reúne los requisitos establecidos en el artículo 191 del Código General del proceso. Por las siguientes razones:

1.-El demandado tiene capacidad para confesar pues es una persona mayor de edad y por tanto puede disponer de sus derechos.

2.- Al aceptar los hechos de la demanda, le trajo como consecuencia que favoreció a la demandante porque con su declaración quedó probada la causal de divorcio que ella invocó.

3.- La causal de divorcio puede probarse por confesión pues la ley no lo prohíbe.

4.- Fue una confesión libre, espontánea, sobre hechos personales como son la situación familiar que originó la separación de hecho con la demandante.

Estando así las cosas, el interrogatorio de parte rendido por el demandado es de tal entidad que permite resolver el problema jurídico planteado favorablemente a las pretensiones de la demanda porque con dicha probanza quedó demostrado que los esposos **RODRIGUEZ - RIOS**, se encuentran separados de hecho hace aproximadamente 5 años; es decir, desde el 2017, para el año 2022; que entre ellos desde ese tiempo no existe comunidad de vida matrimonial, que se suspendieron recíprocamente las obligaciones surgidas por el hecho del matrimonio; es decir, la cohabitación, la fidelidad, el deber de socorro y ayuda mutua que solo se logra cuando la pareja realiza su proyecto de vida juntos; en este caso, el tiempo de separación de la pareja (5 años) permite inferir sin asomo de duda que entre ellos no hay intención de un avenimiento con la finalidad de reconstruir su vida matrimonial.

A lo anterior hay que agregar el comportamiento procesal del demandado quien no contestó la demanda, lo que hace presumir cierto los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda; tal como lo establece el artículo 97 del C.G.P.; su comportamiento displicente en la audiencia, donde mostró un desinterés frente al proceso, priorizando su actividad laboral dejando en un segundo plano el litigio en su contra. Solo le interesa mantener un matrimonio donde los fines propios del mismo no se están cumpliendo.

En los alegatos de conclusión tanto el apoderado de la demandante como la Procuradora y el Defensor de Familia fueron coincidentes en afirmar, que la causal de divorcio se encuentra probada por confesión de la parte demandada por lo que solicitaron se despache favorablemente las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, el despacho accederá a las pretensiones de la demanda, por lo que decretará el divorcio del matrimonio civil celebrado entre las partes, declarará disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal.

En lo que tiene que ver con las obligaciones de los hijos habido entre la pareja, ambos le manifestaron al despacho que ello se encuentra reglamentado por

conciliación por lo que en esta oportunidad no se decidirá lo pertinente y se mantendrá lo acordado por ellos.

En virtud y mérito de lo anteriormente expuesto, el Juzgado Primero de Familia de esta ciudad:

R E S U E L V E

PRIMERO: DECRETAR el divorcio del matrimonio civil celebrado entre los señores **JUAN RODRIGO RODRÍGUEZ ALFONSO** identificado con cédula de ciudadanía 74.346.508 y **ROSA LEONOR RÍOS CASTRO** identificada con cédula de ciudadanía 40.046.140 en la Notaría Segunda de Valledupar, el 31 de diciembre de 2003, por la causal 8° del artículo 154 del C.C., es decir: *“La separación de cuerpos judicial o, de hecho, que haya perdurado por más de dos años”*.

SEGUNDO: DECLARAR disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal formada por el hecho del referido matrimonio, la que se liquidara conforme a la ley; a continuación de este proceso o por vía notarial.

TERCERO: En consideración a la disolución del matrimonio, las partes continuarán viviendo en residencias separadas y cada uno de ellos asumirá su propia subsistencia de acuerdo a su capacidad económica.

CUARTO: Se ordena la inscripción de la presente providencia en los folios correspondientes en el Registro Civil de Matrimonio como en el Registro Civil de Nacimiento de las partes.

QUINTO: Se mantiene lo conciliado por las partes respecto de las obligaciones con sus hijos **JUAN SEBASTIAN** y **JHONIER ANDRES RODRIGUEZ RIOS**.

SEXTO: Expídase copia digital de esta providencia en caso de ser solicitada por las partes.

SEPTIMO: Ejecutoriada esta providencia, se ordena el archivo del proceso.

OCTAVO: Sin condena en costas, por cuanto no existió controversia. Numeral 8° artículo 365 del CGP.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

ÁNGELA DIANA FUMINAYA DAZA
JUEZ

JMSB

Firmado Por:
Angela Diana Fuminaya Daza
Juez
Juzgado De Circuito
De 001 Familia
Valledupar - Cesar

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **7098ea25f06019a71121ede19a183efd19a1d463d480e209596b2896f96c6e55**

Documento generado en 09/02/2023 06:48:03 AM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>